

RESUMEN DEL AÑO

LIBERTAD DE
EXPRESIÓN



RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

EL ESPACIO CÍVICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

A. ACERCA DE ESTE INFORME

Todos los años, el Informe de CIVICUS sobre el Estado de la Sociedad Civil analiza los principales acontecimientos que han involucrado y afectado a la sociedad civil en todo el mundo. Buscamos celebrar nuestros logros como sociedad civil, identificar los desafíos a los que nos hemos enfrentado y evaluar la forma en que los acontecimientos recientes han afectado a la sociedad civil, así como también la manera en que la sociedad civil ha respondido a ellos. Esta sección del informe se centra en la libertad de expresión como un aspecto vital del espacio que ocupa la sociedad civil. Otras secciones tratan acerca de la crisis actual de la democracia y sus consecuencias para la sociedad civil, las movilizaciones ciudadanas en movimientos de protesta y las acciones de la sociedad civil a nivel internacional.

Nuestro informe es sobre la sociedad civil, y está hecho por y para la sociedad civil. Además de las cuatro partes de revisión de los acontecimientos del último año, nuestro informe tiene una sección especial sobre el tema de este año, la sociedad civil y el sector privado, que incluye 27 contribuciones de activistas, líderes, expertos y actores de la sociedad civil, así como un ensayo temático que se nutre de esas contribuciones. Este informe también se alimenta de las respuestas a la encuesta anual a miembros de nuestro Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA), formado por entidades de coordinación y membresía de la sociedad civil a nivel nacional y regional, y de una serie de entrevistas con integrantes de nuestra alianza que vivieron de cerca las historias más importantes del último año. Estamos muy agradecidos a todos nuestros colaboradores por sus esfuerzos conducentes a la elaboración de este informe.

B. LA CRECIENTE INTOLERANCIA HACIA EL DISENSO

La capacidad de la sociedad civil para responder a las actuales políticas regresivas, descrita en la primera sección de este informe, así como para reaccionar a los nuevos desafíos a medida que surgen, se ve obstaculizada por las limitaciones que pesan sobre el espacio de la sociedad civil – “espacio cívico”, para ser más breves –, que depende del respeto efectivo de las tres libertades fundamentales de la sociedad civil: las libertades de asociación, reunión y expresión.

Con el giro reaccionario y populista que está tomando la política en muchos países, la expresión de disenso frente a partidos y líderes gobernantes es vista, cada vez más, como un acto político, más que como una parte normal del funcionamiento de la democracia. A esto se agregan las presiones existentes sobre la libertad de expresión. Cuando trata de expresarse, la sociedad civil encuentra con frecuencia que los canales de comunicación están restringidos. Puede que los estados y sus líderes utilicen su poder sobre los medios para censurar y reprimir opiniones alternativas. Puede que acusen a los medios y a la sociedad civil de difundir noticias falsas y con esa excusa les ataquen e impongan restricciones. Puede que les apliquen leyes arcanas como las de difamación penal. Puede que estrechen el espacio virtual. Los periodistas que intentan cubrir voces disidentes pueden experimentar hostigamiento, arrestos y violencia física.

Los anteriores Informes sobre la Sociedad Civil sostuvieron que la sociedad civil debe prestar especial atención a los ataques y restricciones contra los periodistas, porque donde los periodistas son reprimidos también lo son los activistas de la sociedad civil, a menudo por las mismas razones. De hecho, en muchos contextos no es sencillo, ni tampoco útil, distinguir entre periodistas y activistas de la sociedad civil que hacen un uso activo de los medios tradicionales y las redes sociales. El [CIVICUS Monitor](#), nuestra nueva plataforma en línea que evalúa la calidad del espacio cívico en cada país, publicó entre junio de 2016 y marzo de 2017 [101 informes sobre ataques](#) a periodistas. Los datos indican que los periodistas tuvieron mayor riesgo de sufrir ataques verbales o físicos por informar sobre cuestiones políticas, protestas, conflictos y corrupción estatal.

El Instituto Internacional de Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) proporciona pruebas adicionales de los riesgos que corren los periodistas. Según el IPI, por lo menos 83 periodistas [murieron](#) en 2016 como resultado directo de su trabajo, y la mitad de esas muertes ocurrió cuando los periodistas estaban cubriendo conflictos armados, particularmente en Irak, Siria y Yemen. Los periodistas fueron también atacados por su origen étnico, orientación política o afiliación religiosa en muchos contextos altamente cargados y polarizados, como en los casos de Bangladesh, India, Sudán del Sur y Turquía.

Además, el [Índice de Impunidad](#) del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) identifica a los países en los cuales los asesinatos no resueltos de periodistas son más frecuentes, así como las principales fuentes de amenazas contra los periodistas y de impunidad. Los grupos extremistas islámicos constituyen una fuente importante de amenazas identificada por CPJ, en particular en zonas de conflicto. Una concentración importante de asesinatos no investigados se observa en Irak, Somalia y Siria, y la cantidad de ataques es mayor en Afganistán, Bangladesh, Nigeria y Pakistán.

ATAQUES EXTREMISTAS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Si bien el análisis del CIVICUS Monitor deja en claro que el Estado es la principal fuente de peligro para los derechos de la sociedad civil, en algunos países la amenaza es más compleja: los ataques contra la sociedad civil pueden ser habilitados por un Estado débil e incapaz de garantizar el imperio de la ley o hacer valer la autoridad del Estado sobre el territorio, en particular en condiciones de polarización y conflicto. Los elementos del Estado también pueden mezclarse con fuerzas extremistas.

[Bangladesh](#) es un país donde tanto las fuerzas extremistas como el Estado representan una amenaza para la libertad de expresión. El [Informe 2016 sobre el Estado de la Sociedad Civil](#) reportó allí una serie de asesinatos contra blogueros y activistas seculares. Esto era indicativo de una tendencia más amplia: el [CIVICUS Monitor](#) registra que unas 89 voces disidentes fueron silenciadas de manera similar en 2015 y en la primera mitad de 2016, y que 74 periodistas fueron presuntamente torturados en la primera mitad

LOS DATOS
INDICAN QUE
LOS PERIODISTAS
TUVIERON MAYOR
RIESGO DE
SUFRIR ATAQUES
VERBALES O
FÍSICOS POR
INFORMAR SOBRE
CUESTIONES
POLÍTICAS,
PROTESTAS,
CONFLICTOS Y
CORRUPCIÓN
ESTATAL

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

de 2016. La situación no ha mejorado: la organización de la sociedad civil (OSC) [Odhikar](#) de Bangladesh informó que entre agosto y noviembre de 2016 por lo menos 26 personas fueron “desaparecidas”, unas 69 fueron asesinadas extrajudicialmente y 12 periodistas fueron lesionados; se sospechó que los ataques habían sido perpetrados por las fuerzas de seguridad. La violencia continuó en 2017: en [febrero de 2017](#), el periodista Abdul Hakim Shimul murió después de ser alcanzado por balas perdidas en un conflicto entre miembros rivales del partido gobernante.

La violencia no es la única amenaza. Tan solo en agosto de 2016 el Estado [bloqueó](#) más de 30 sitios web y [detuvo a tres periodistas](#) por difundir rumores acerca del hijo del primer ministro. La vigilancia y la investigación de las OSC aumentó después de dos ataques terroristas en la capital, Dhaka, en [julio de 2016](#), ya que entonces el Estado acusó a algunas OSC de tener vínculos con los extremistas. El Estado también [detuvo secretamente](#) a algunas personas que habían sido tomadas como rehenes en los ataques. Entretanto el Estado pareció privilegiar la protección de intereses económicos cuando [arrestó a un periodista](#) que cubría una huelga de trabajadores textiles que fabricaban ropa para las principales cadenas internacionales en diciembre de 2016.

Un [activista de la sociedad civil de Bangladesh](#) entrevistado, que pidió mantener el anonimato, sugiere que el fracaso del Estado a la hora de asegurar el imperio de la ley, en un contexto de alta polarización donde las reglas normales de la competencia política se han derrumbado, ha habilitado al extremismo¹.

El imperio de la ley es inexistente. Por lo tanto existe un enorme vacío político que permite que crezca el extremismo político. Al mismo tiempo, el gobierno quiere proyectarse a sí mismo como el único custodio del “secularismo” y por lo tanto busca proyectar a los opositores políticos dominantes y a la juventud que está en contra del gobierno como “extremistas” para llevar a cabo acciones letales para silenciarlos.

La libertad de expresión ha sido restringida y la mayor parte de los medios de comunicación están o bien controlados directamente por el gobierno o reciben instrucciones de las agencias de inteligencia. Desde 2013 se han producido ataques y asesinatos de blogueros, activistas online y ciudadanos extranjeros en Bangladesh

El activista sugiere además que el Estado puede ser cómplice de ataques extremistas. El disenso es atacado porque va en contra del intento del Estado de controlar los medios y caracterizar la disidencia como extremismo. Entretanto el Estado pretende posicionarse como la única fuerza capaz de combatir el extremismo:

¹ Extracto editado de una entrevista realizada en julio de 2016. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2ldMnNS>.

Aunque los asesinatos han sido presuntamente reivindicados por un “grupo extremista islámico”, la gente también sospecha que las agencias de inteligencia podrían tener una participación en los asesinatos, dado que el gobierno se beneficia con dichos ataques: los aprovecha para silenciar a los principales partidos de la oposición y las voces disidentes. El primer ministro ha culpado a los principales partidos políticos de la oposición de los asesinatos selectivos, y en julio de 2016, las fuerzas de seguridad detuvieron a 15.000 personas en un operativo de arrestos masivos.

Ya existe una enorme polarización en la sociedad. La gente no confía en las fuerzas de seguridad ni en el gobierno. El derecho a la libertad de opinión y de expresión está gravemente restringido debido a la aplicación arbitraria de leyes represivas. La realidad es que el ciudadano que opina en contra del gobierno es arrestado o acosado por el Estado. Se trata ya de una situación de conflicto de baja intensidad que podría agravarse.

En Bangladesh hoy nadie está a salvo, excepto las personas que están acomodadas con el régimen actual. En los últimos años, miembros del partido gobernante, la Liga Awami, se han apoderado de tierras de gente pobre perteneciente a grupos religiosos minoritarios, quienes al mismo tiempo están sufriendo los llamados ataques “extremistas”. Incluso muchos de estos ataques a templos hindúes y budistas han sido llevados a cabo por activistas del partido de la Liga Awami, según declaraciones de víctimas y testigos. Como el imperio de la ley está ausente y el sistema de administración de justicia no funciona, los responsables no han sido castigados y las personas pertenecientes a comunidades minoritarias siguen siendo muy vulnerables.

En este contexto, el disenso, incluso cuando se ejerce contra el extremismo, es visto por el Estado como una amenaza, y activistas y periodistas se encuentran bajo ataque simultáneo desde dos frentes: los extremistas y el Estado.

Asimismo, como relata el Foro de ONG de Pakistán, miembro de AGNA, tanto los grupos extremistas como el Estado amenazan a la sociedad civil en [Pakistán](#) al tiempo que la retórica estatal avala los ataques extremistas contra la sociedad civil: ²

Por un lado, las instituciones estatales, incluyendo las agencias de inteligencia, han comenzado a sospechar de las OSC, y en particular de las que trabajan en derechos humanos, de colusión con Occidente, y han introducido políticas y procedimientos para asfixiar su trabajo y su funcionamiento. Por otra parte, las organizaciones extremistas apuntan constantemente contra los activistas porque los consideran agentes de Occidente. Hacer funcionar una simple organización de derechos humanos se ha vuelto mucho más peligroso.

² Todas las contribuciones del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA) a este informe son extractos editados de una encuesta administrada a los miembros de AGNA entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. Las respuestas completas serán publicadas por separado.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El Estado es [con frecuencia acusado](#) de no proteger a los grupos vulnerables, entre ellos los activistas *online*, en este contexto donde la libertad de expresión [es restringida constantemente](#). Cinco activistas anti-talibán, de activa participación en blogs y redes sociales, [desaparecieron](#) en enero de 2017. Además de hacer campaña contra los talibanes, estos activistas criticaban la inacción del gobierno contra el extremismo y los abusos de los derechos humanos por parte de los militares. Sus sitios web y blogs también [fueron sacados de Internet](#). Sus desapariciones, en un país donde [abundan](#) los casos de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad, desataron [protestas callejeras](#) y [campañas online](#) en reclamo de su reaparición. Los aparentes secuestros fueron condenados por David Kaye, el [Relator Especial](#) de las Naciones Unidas (ONU) sobre la libertad de expresión y la [Comisión de Derechos Humanos de Pakistán](#). Además de desaparecer, los cinco fueron objeto de una [denuncia por blasfemia](#) por sus publicaciones, lo que destaca el modo en que la [Ley sobre la blasfemia](#) es utilizada para reprimir el disenso. Junto con sus seguidores, estos activistas fueron difamados y amenazados por extremistas en las redes sociales.

A fines de enero de 2017 los cinco activistas [reaparecieron](#) en circunstancias igualmente confusas. Salieron del país por razones de seguridad, y en un principio [ninguno de ellos](#) estuvo en condiciones de hacer declaraciones. En marzo de 2017, uno de los activistas, [Waqas Goraya](#), declaró que había sido secuestrado y [torturado](#) y que había quedado tan sacudido que no había podido reanudar el blog. Se sospecha que las fuerzas de seguridad estuvieron detrás de los secuestros. La [inacción del gobierno](#) a la hora de investigar el caso también generó preocupación.

Estos cinco activistas no fueron los primeros en ser amenazados por extremistas por expresarse. En mayo de 2016, otro bloguero, [Khurram Zaki](#), fue asesinado después de publicar artículos sobre el extremismo y llamar la atención sobre el papel de los líderes religiosos extremistas. Un destacado músico sufí, [Amjad Sabri](#), fue asesinado en junio de 2016, aparentemente por extremistas. En marzo de 2017 [tres blogueros más](#) fueron acusados de blasfemia en un tribunal contra el terrorismo, y el mes siguiente el destacado activista [Riaz Ahmed](#) fue arrestado y detenido cuando se dirigía a una conferencia de prensa para exigir la liberación de otro activista detenido. Parece claro que fue detenido por apoyar a personas acusadas de blasfemia. En abril de 2017, el Estado también anunció que estaba [investigando](#) a OSC por alegaciones de que difundían blasfemias y pornografía en las redes sociales. La amenaza que enfrentan los activistas de las redes sociales no es muy diferente cuando proviene de grupos extremistas o del Estado.

Estos ataques son indicativos de un clima de restricción más amplio para la libertad de expresión, en el cual el Estado ha suspendido canales de televisión y bloqueado la emisión de programas. Las repetidas interrupciones de la estación Geo News TV [desencadenaron protestas](#) en varias ciudades de Pakistán en agosto de 2016. Si bien la penetración de Internet ha aumentado, el Estado ha introducido una variedad de herramientas de vigilancia en Internet y sigue siendo [altamente intervencionista](#) ya que bloquea contenidos con la cooperación de grandes compañías de Internet. En marzo de 2017, el gobierno [les pidió a Facebook](#) y Twitter que identificaran a los ciudadanos pakistaníes, incluso si vivían en el extranjero, que publicaran materiales considerados insultantes para el Islam, lo que podría resultar en acusaciones por blasfemia y en una potencial sentencia de muerte. El gobierno también anunció que Facebook había [eliminado](#) el 85% del contenido cuya eliminación el Estado había solicitado por considerarlo blasfemo. La [Ley de Prevención de Delitos Electrónicos](#), aprobada en [agosto de 2016](#), confiere al Estado [poderes más amplios](#) para

eliminar contenidos en Internet. Dado su lamentable historial en materia de la libertad de expresión, la sociedad civil no puede confiar en que el Estado utilizará esos poderes sabiamente.

C. TÁCTICAS DE RESTRICCIÓN

La ola de [Evaluaciones Nacionales del Ambiente Habilitante](#) (ENAH) realizadas durante 2016 en 22 países de África, las Américas y Asia proporciona evidencia adicional de los desafíos que enfrenta la libertad de expresión³. En todos los países, la sociedad civil aplicó la misma metodología de la herramienta ENAH, desarrollada por CIVICUS y el Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro (ICNL, por sus siglas en inglés).

Los informes de las ENAH en su conjunto dejan en claro que las garantías constitucionales sobre la libertad de expresión están a menudo debilitadas, como lo muestra lo sucedido con las leyes antiterrorismo introducidas recientemente en Camerún, Jordania y Túnez. Los estados pueden tener poderes amplios y excesivos para subvertir las garantías constitucionales de libertad de expresión, como se observa en los casos de Honduras, Nepal y Tayikistán. Las leyes penales de difamación, calumnias e injurias, a menudo desactualizadas, imponen severas sanciones, sobre todo en Camboya, Panamá y Zambia, y pueden ser sometidas a manipulación política: en Zambia hay varios casos de figuras del gobierno que han llevado adelante casos de difamación penal para silenciar a sus críticos. Las críticas al presidente están penalizadas en Benín, Líbano y Zambia, como también lo están en Jordania las críticas al rey. Estas amenazas son reales: en enero de 2017, [ocho personas fueron detenidas](#) en Jordania bajo la acusación de “insultar al rey” y de “incitar a la diseminación del caos para socavar el régimen político de Jordania” a causa de sus publicaciones en las redes sociales.

La investigación de la ENAH también identifica desafíos en torno de la propiedad de los medios de comunicación y la intervención estatal. En algunos países, como México y Panamá, la alta concentración de la propiedad de los medios obstaculiza la expresión de una diversidad de voces, y en otros países, como Bolivia y Camboya, el Estado y el partido gobernante controlan firmemente los medios clave. En Camboya, Uganda y Zambia, los funcionarios estatales pueden intervenir para suspender licencias de radiodifusión.

Como se analizó en la primera parte de este informe, las elecciones pueden poner de relieve y exacerbar los problemas. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación y el consiguiente sesgo de la cobertura fueron identificados como problemas en las disputadas elecciones [de octubre de 2016](#) en [Moldavia](#). La interferencia estatal en los medios de comunicación se observó en [Zambia](#) alrededor de la época de las elecciones generales: en agosto de 2016, el Estado [suspendió las licencias](#) de tres estaciones de televisión y radio y detuvo a cuatro miembros de su personal; en octubre de 2016, el director de una estación de radio

³ Los 22 países de la ENAH fueron: Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Colombia, Honduras, India, Jordania, Líbano, México, Mozambique, Nepal, Nigeria, Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Tayikistán, Túnez, Uganda y Zambia.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN



comunitaria fue [golpeado por la policía](#), uno más de una serie de [ataques a periodistas](#); y en noviembre la policía [detuvo a cinco personas](#) vinculadas a una estación de radio acusada de simpatizar con la oposición. [Wilson Pondamali](#), un periodista de investigación independiente y activista de medios, ofrece más información sobre estos hechos⁴:

Los medios de difusión de Zambia, excepto la radiodifusora nacional Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC), están regulados por la no tan independiente Independent Broadcasting Authority (IBA). El consejo directivo y el director general de la IBA son nombrados por el Ministro de Información y sus oficinas están ubicadas en el complejo de medios de comunicación masiva perteneciente al gobierno que también alberga a la ZNBC y a otra agencia de medios del gobierno, Zambia News and Information Services.

La IBA suspendió las licencias de radiodifusión de las estaciones de radio Muvi TV, Komboni e Itezhitezhi unos días después de la elección general de agosto. Las acusó por la presunta emisión de declaraciones peligrosas para la seguridad nacional. Los tres medios de comunicación nunca fueron formalmente acusados ni tuvieron la oportunidad de dar

Dying Regime
Bloguera apuñalada hasta la muerte en Isla Mauricio

su versión de los hechos; tan solo se les entregaron las notificaciones de suspensión y se los desconectó. Sus instalaciones fueron tomadas por policías fuertemente armados que negaron la entrada a los trabajadores. Las estaciones fueron reincorporadas en forma desleída después de que el presidente asumió su cargo. En el proceso, la directora ejecutiva de Komboni, Lesa Kasoma Nyirenda, fue atacada por la policía cuando intentaba ingresar a las instalaciones tras ser restituida en el cargo.

Las autoridades también emprendieron una campaña para cerrar el periódico *Post*, tal como lo relata [Lewis Mwape](#), del Consejo para el Desarrollo Social de Zambia⁵:

En junio de 2016, agentes de la Autoridad de Rentas de Zambia se abalanzaron sobre las oficinas del Post y cerraron el periódico, con el argumento de que adeudaba impuestos. El periódico sostuvo que la mayor parte de su deuda había sido pagada antes de la redada. Si bien puede ser cierto que el Post adeudara dinero, la elección del momento y el estilo de la acción suscitó preocupación. Antes de las elecciones, este periódico era una voz crítica que brindaba información a los ciudadanos para equilibrar la que recibían de los medios estatales.

El incumplimiento del pago de impuestos por parte de cualquier institución es ilegal. Sin embargo, me preocupa cuando se utilizan las instituciones del Estado para victimizar a aquellos que son percibidos como opositores del partido que está en el poder. En muchos casos quienes han acumulado enormes atrasos tributarios fueron alguna vez amigos de los mismos gobiernos y partidos políticos que no vieron ningún problema en que no pagaran sus impuestos, pero ahora son perseguidos porque su opinión ha cambiado. La victimización no es la respuesta. También son preocupantes los informes de que la policía lanzó gases lacrimógenos a los empleados del periódico en los días que siguieron al cierre, cuando intentaron presentarse a trabajar.

El Post ha sido incansablemente crítico del gobierno y hubo funcionarios públicos que dijeron que encontrarían una manera de cerrar este periódico. Esta es una de esas formas, en mi opinión, de silenciar a este periódico mediante el uso de instituciones públicas para reprimir a los medios. Fue triste ver la posterior detención del propietario del periódico, de su esposa y del editor del periódico.

Posteriormente, las autoridades se abocaron a [liquidar](#) el periódico. Después de la elección, el Estado [arrestó](#) a prominentes líderes de la oposición y [advirtió a los ciudadanos](#) sobre su uso de las redes sociales. Es a causa de acciones como esta que un [informe de 2017](#) concluyó que en Zambia existen graves problemas sistémicos y legales del partido gobernante y el Estado en materia de libertad de expresión.

⁴ Extracto editado de una entrevista realizada en marzo de 2017. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2mV7Lvu>.

⁵ Extracto editado de una entrevista realizada en julio de 2016. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2ldMnNS>.

**DESPUÉS DE LA
ELECCIÓN, EL
ESTADO ARRESTÓ
A PROMINENTES
LÍDERES DE LA
OPOSICIÓN Y
ADVIRTIÓ A LOS
CIUDADANOS
SOBRE SU USO
DE LAS REDES
SOCIALES**

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

De modo similar, en [Bolivia](#) la interferencia del Estado en la propiedad de los medios de comunicación, así como el vilipendio político de los periodistas, son señalados como tendencias preocupantes por otro miembro de AGNA, Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS):

Existe una fuerte tendencia a reducir las voces críticas y el debate de ideas. Hasta antes de la gestión gubernamental del Presidente Evo Morales, el 80% de los medios eran privados; hoy en día operan medios oficialistas y paraestatales que van anulando la creación de contenidos diversos y plurales. La gran mayoría de los medios están aliados con el gobierno, replican sus lineamientos y reproducen los discursos presidenciales. Entre las acciones que han propiciado una mayor vulneración a la libertad de expresión se encuentra la “asfixia económica” de la que denuncian ser víctimas algunos medios de comunicación privados. Los medios de comunicación independientes no reciben publicidad estatal, lo cual socava su sostenibilidad y pone en riesgo la fuente de trabajo de centenares de personas.

Este poder de los estados para penalizar a los medios críticos y recompensar a los leales mediante la asignación de publicidad oficial se observa en otros países como [Lesotho](#), [Eslovenia](#) y [Surinam](#). El Estado es la mayor [fuente individual de ingresos](#) de los medios de comunicación en los países africanos, y por lo tanto sus decisiones sobre cómo asignar sus gastos de publicidad pueden tener efectos muy importantes, en particular en los muchos contextos en que los medios independientes tienen problemas financieros.

UNITAS también llama la atención sobre las formas en que las figuras políticas buscan vilipendiar a los medios independientes en Bolivia:

El gobierno boliviano ha desplegado una fuerte campaña de desprestigio contra medios de comunicación independientes. Algunos periodistas destacados como Amalia Pando y Andrés Gómez fueron considerados públicamente como “enemigos del proceso de cambio” después de que denunciaran presuntos actos de corrupción en altas esferas del gobierno. En mayo de 2016, el Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, fue interpelado por la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La sesión examinó los vínculos entre el mencionado Ministro y Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales y acusada de uso indebido de influencias e enriquecimiento ilegítimo. El Ministro de la Presidencia negó todo vínculo con ella e hizo uso irrestricto del atril para descalificar a los medios de comunicación que habían dado cobertura al denominado “caso Zapata”. El Ministro se refirió repetidamente a los medios de comunicación como “cártel de la mentira”, calificativo que luego fue adoptado por otras altas autoridades del país, incluido el propio presidente. Esto fue condenado por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, durante una visita al país. En respuesta, el Presidente Morales escribió en su cuenta oficial de Twitter que el Relator Especial también era parte del “cártel de la mentira” por defender a los mentirosos medios de comunicación bolivianos. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2016, el gobierno boliviano presentó un documental denominado “El Cartel de la Mentira”.

Además de en Bolivia, en la actualidad se observa un fuerte vilipendio de los medios por parte del Estado en [Tanzania](#). El presidente John Magufuli ha [advertido a los medios](#) que su libertad es [limitada](#) y les dijo a los periódicos críticos que sus [días están contados](#). La ley sobre delito informático confiere al Estado amplios poderes y enfría la expresión en Internet. Kepe Tanzania, miembro de AGNA, informa sobre estos desafíos:

En agosto de 2016 el ministro de información de Tanzania, Nape Nnauye, ordenó a dos estaciones privadas, *Radio Five* y *Magic FM*, que cesaran inmediatamente sus transmisiones. El ministro de información alegó que *Magic FM* había emitido contenidos que podían causar una ruptura de la ley y el orden y que *Radio Five* había difundido contenidos sediciosos. El gobierno también prohibió dos periódicos, *Mawio* y *East African*. La razón esgrimida fue que los artículos de *Mawio* podían incitar a la violencia, mientras que *East African* fue acusado de tener una agenda contra Tanzania. El ministro identificó una caricatura publicada en *East African* que a su juicio demostraba falta de respeto hacia la persona y el cargo del presidente.

[Maxence Melo](#), cofundador de Jamii Forums, una prominente plataforma de redes sociales que promueve la libertad de expresión en Tanzania, fue arrestado por la policía por supuestamente negarse a divulgar la identidad de los colaboradores que presuntamente publicaban información sensible en la plataforma. Diez personas en Tanzania fueron acusadas de insultar al presidente John Magufuli en un mensaje de WhatsApp. Fueron acusados en virtud de la nueva Ley de Delitos Informáticos de 2015. Algunos fueron multados con hasta siete millones de chelines de Tanzania (más de US\$3.000). La ley fue aprobada con el propósito de limitar la libertad de expresión, especialmente para los usuarios de redes sociales. Otras leyes que fueron promulgadas para limitar el acceso a la información y la libertad de expresión fueron la [Ley de Servicios de Medios de 2016](#) y la Ley de Estadísticas de 2015.

Hay, sin embargo, una sociedad civil que sigue luchando:

Las OSC presentaron una demanda constitucional en contra de la Ley de Delitos Informáticos de 2015, publicaron comunicados de prensa y proporcionaron apoyo a los activistas que fueron torturados, detenidos y encarcelados por la policía. Utilizaron con eficacia las redes sociales para presionar al gobierno para que deje de violar los derechos humanos básicos y la Constitución.

Estos problemas, por supuesto, no se limitan a Tanzania. Respecto de los nuevos medios, la mayoría de las OSC que participaron en el proceso de la ENAH consideraron que la propagación de Internet y de las redes sociales ha mejorado la capacidad de la sociedad civil para compartir sus puntos de vista, pero observaron que la libertad en Internet es cada vez más cuestionada y está sujeta a nuevas leyes que a menudo no son habilitantes. Además de desafíos tales como el bloqueo de sitios web y de la recepción de telefonía móvil, y la restricción de los contenidos de Internet, en muchos países existe preocupación acerca de la reciente introducción de propuestas de leyes que dan a los estados nuevos poderes sobre Internet, como sucede en Camboya, Jordania, Filipinas y Uganda. So [pretexto](#) de combatir delitos informáticos o mejorar la seguridad en Internet, los estados están adoptando excesivos poderes de [vigilancia](#), [invadiendo la privacidad](#) y criminalizando la expresión *online*.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

[Bahrein](#) sigue sobresaliendo por su práctica de encarcelar a quienes utilizan las redes sociales para expresar su desacuerdo: en el momento de escribir este informe, [Nabeel Rajab](#) es uno de los muchos que siguen detenidos, con [múltiples aplazamientos](#) de su juicio por publicar tweets. Se enfrenta a una potencial [condena de prisión](#) de hasta 18 años y ha sido mantenido en [confinamiento en solitario](#) incluso después de haber sido sometido a una intervención quirúrgica. En 2016, [16 personas](#) fueron sentenciadas a un total de 26 años de prisión por cargos relacionados con la libertad de expresión. Las compañías de comunicaciones también han [interrumpido el acceso a Internet](#) regularmente en el pueblo de Diraz, donde se realizaron protestas.

El gobierno de [Camerún](#) inició una ofensiva contra las redes sociales, designándolas como una “[nueva forma de terrorismo](#)”, después de que fueran usadas para llamar la atención sobre las fallas de gobernanza que resultaron en un catastrófico accidente ferroviario en octubre de 2016. Además, el Estado respondió a las protestas contra la falta de representación de las regiones angloparlantes de Camerún mediante [el bloqueo de Internet](#) y de las redes sociales en la región desde enero hasta [abril de 2017](#), lo cual contribuyó más aún a la [exclusión](#) de las voces angloparlantes. El Estado [presionó](#) a las compañías de comunicación para que cortaran las conexiones y [amenazó con imponer sanciones](#) tanto a los [medios](#) nacionales como a los internacionales si informaban sobre el conflicto en la región angloparlante. Los ataques a la libertad de expresión fueron de la mano con restricciones sobre la libertad de reunión: hubo ataques y asesinatos de manifestantes y [los líderes de la protesta](#) fueron detenidos y sometidos a [juicio militar](#) bajo acusaciones de [delitos de terrorismo](#). En abril de 2017, el periodista [Ahmed Abba](#), quien había informado sobre el grupo terrorista Boko Haram, también fue [condenado](#) por cargos de terrorismo; tras un [juicio viciado](#), un tribunal militar le impuso una sentencia de diez años.

La sociedad civil también se encontró bajo ataque virtual en [Kirguistán](#), donde un controvertido referéndum para una reforma constitucional, realizado en diciembre de 2016, introdujo una serie de cambios regresivos que tendrán efecto sobre la gobernanza, los derechos humanos y de la sociedad civil. Antes del referéndum, la sociedad civil sufrió vigilancia y [ataques cada vez más intensos](#), y esto continuó hasta 2017: en enero de 2017 fue ratificada la condena a prisión perpetua para el periodista independiente [Azimjon Askarov](#) por informar sobre la violencia étnica, y en marzo de 2017 varios activistas fueron [detenidos](#) por participar en protestas por la libertad de expresión. La Coalición de ONG por la Democracia y la Sociedad Civil, miembro de AGNA, especifica los desafíos:

Los cambios al artículo 16 de la Constitución eliminarán los derechos humanos de los principios fundamentales de la República Kirguisa. Otros cambios importantes incluyen la modificación de las reglas para el periodo de prescripción de delitos, disposiciones poco claras sobre las obligaciones civiles, posible restricción de las libertades, privación de la nacionalidad, ampliación de poderes para el primer ministro, una reforma polémica sobre el estatus de los jueces y confusión entre los poderes ejecutivo y judicial.

La sociedad civil hizo varios intentos de llamar a un debate más amplio sobre la reforma de la Constitución, cuestionando la legalidad de las modificaciones, e intentando convencer a los miembros del parlamento para que consideraran abstenerse de reconocer esta reforma. Las OSC concientizaron sobre la falta de educación de los votantes y la insuficiente información adecuada provista a los votantes sobre el contenido de la reforma constitucional.

La disputa sobre la enmienda de la Constitución indudablemente ha empeorado la situación de las OSC, que han sido a menudo caracterizadas por el gobierno como problemáticas. Para las OSC y los medios de comunicación el campo político y el espacio cívico se están reduciendo progresivamente. Los hackeos y otros ataques informáticos han aumentado en los últimos años, y podrían ser un medio para aumentar la represión por parte de agencias gubernamentales. Otros riesgos incluyen una mayor tendencia hacia la adopción de políticas relativas al ciberespacio, que promueven la vigilancia online y ponen en riesgo el activismo de la sociedad civil y la libertad de los ciudadanos en general.

En marzo de 2017, la fiscalía de Kirguistán [anunció](#) que reclamaría indemnizaciones por daños y perjuicios a dos medios de comunicación por la supuesta publicación de información falsa. Este es solo un ejemplo de una tendencia creciente del Estado a acusar a la sociedad civil de difundir información y noticias falsas. La primera parte de este informe, sobre la nueva crisis democrática, puso de relieve el uso creciente del término “noticias falsas”. Cuando ayudan a persuadir a los ciudadanos para que apoyen determinadas políticas y atacan los derechos humanos y el internacionalismo, las noticias falsas perjudican a la sociedad civil. Pero además, el término está siendo utilizado cada vez más por estados y políticos para socavar la confianza en los medios y permitir ataques contra activistas y periodistas. En [marzo de 2017](#), por ejemplo, el gobierno de [China](#) acusó a Jiang Tianyong, un prominente activista, de difundir noticias falsas sobre la tortura de [Xie Yang](#), un activista detenido. Esta fue la primera vez que el Estado chino adoptó la terminología de las “noticias falsas”, y el objetivo fue claramente desacreditar los informes de Jiang Tianyong. En un indicio más de la amenaza a los medios, al día siguiente un [equipo de la BBC](#) fue atacado y forzado a firmar una confesión por intentar grabar una entrevista con un ciudadano cuyo padre había sido asesinado en una disputa de tierras con el gobierno. Varios países del [Sudeste Asiático](#), entre ellos [Camboya](#), también están atacando a las voces disidentes mediante su caracterización como fuente de falsas noticias, y amenazando con introducir nuevas leyes contra ellas.

Un ministro [sudafricano](#) también sugirió, en marzo de 2017, que debía introducirse una mayor regulación de las redes sociales para combatir las noticias falsas, lo que desencadenó una rápida reacción [crítica](#) de parte de la sociedad civil. Entretanto, en el represivo [Burundi](#), donde el Estado ha [restringido despiadadamente](#) el espacio cívico desde [las protestas de 2015](#) contra la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de ejercer un tercer mandato presidencial, las denuncias de violaciones de los derechos humanos y crisis humanitaria son ahora [desestimadas](#) por el gobierno mediante su descalificación como noticias falsas. El gobierno describe a los periodistas como “[enemigos del pueblo](#)”, suscitando temor a que el discurso del odio alimente el regreso a las prácticas genocidas del pasado.

Los [relatores especiales](#) de importantes instituciones internacionales de derechos humanos han expresado preocupación acerca del potencial de los estados para aumentar la censura bajo el pretexto de impedir la circulación de noticias falsas. [Lyndal Rowlands](#), de la

EL TÉRMINO ESTÁ SIENDO UTILIZADO CADA VEZ MÁS POR ESTADOS Y POLÍTICOS PARA SOCAVAR LA CONFIANZA EN LOS MEDIOS Y PERMITIR ATAQUES CONTRA ACTIVISTAS Y PERIODISTAS

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Agencia Inter Press, explica el desafío que representan las noticias falsas para la libertad de expresión⁶:

Los ataques a la libertad de prensa afectan a la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos porque es tarea de los medios hacer que los poderosos rindan cuentas de sus actos. Si la vital función democrática que desempeña la prensa libre está en peligro debido a las acusaciones de que informa noticias falsas y por lo tanto debe ser censurada, entonces ¿quién estará allí para informar cuando los gobiernos y otras personas que están en posiciones de poder ataquen a las personas que se manifiestan en las calles o las encarcelen?

Aquellos que diseminan desinformación también pueden usarla para desacreditar a los defensores de derechos humanos y las OSC. Pueden inventar información sobre cuántas personas participaron en una manifestación o argumentar que los manifestantes han sido pagados. Han comenzado a surgir desacuerdos sobre qué manifestantes son violentos y si han sido puestos por la oposición, para desacreditar a uno u otro lado. Esto puede conducir eventualmente a una limitación del derecho de protesta, si los manifestantes pacíficos son desacreditados con éxito.

La cuestión clave aquí es [quién decide](#) qué es clasificado como noticia falsa y qué no, y a qué intereses sirve esa decisión. Una mayor apertura y transparencia, que exige la libertad de prensa, es sin duda necesaria para combatir las noticias falsas; si la respuesta a las noticias falsas es la restricción de los medios, esto sugiere que hay otras motivaciones en juego.

Al igual que el Estado, los agentes no estatales, incluidos los grupos extremistas y criminales y las grandes corporaciones, pueden restringir la libertad de expresión: la investigación de la ENAH identifica altos niveles de violencia contra periodistas en Brasil y Colombia, además de México, donde las amenazas provienen del crimen organizado, y en Mozambique y Filipinas, donde las grandes corporaciones y sus fuerzas de seguridad privadas representan una amenaza. Un miembro de AGNA, el Centro Mexicano para la Filantropía, describe el impacto que tienen el crimen organizado y la [impunidad](#) sobre la libertad de expresión en [México](#):

La libertad de expresión se ha resentido como resultado del clima de inseguridad e incertidumbre que viven los periodistas en nuestro país. La Federación Internacional de Periodistas dio a conocer que durante 2016 once periodistas perdieron la vida en el país, colocándolo como uno de los países más peligrosos para el periodismo, solo por debajo de Irak y Afganistán. En el plano local, en 2016 se mantuvo una fuerte movilización de autodefensas, básicamente grupos de ciudadanos armados que buscan defenderse del crimen y la impunidad en que viven, derivados del secuestro del espacio público por parte de grupos delictivos ligados al narcotráfico.

⁶ Extracto editado de una entrevista realizada en febrero de 2017. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2okM4IM>.

La impunidad de los ataques presenta un profundo desafío en muchos contextos. El [IPI](#) intenta presentar números exactos de los asesinatos de periodistas, pero sus cifras son probablemente subestimadas, en estados en los que en muchos casos no es posible determinar si el asesinato de un periodista está directamente relacionado con su trabajo, debido a la incapacidad del Estado para llevar a cabo investigaciones penales adecuadas. En alrededor de un tercio de los ataques contra periodistas registrados en el CIVICUS Monitor no se identificó a ningún autor. La impunidad fue resaltada también por [UNESCO](#) en 2016, con foco en África. Según UNESCO, solo se abrieron causas judiciales en cinco de los 131 asesinatos de periodistas ocurridos en el continente entre 2006 y 2015. El [Índice de Impunidad de CPI](#) también destaca que no hay solución rápida para la impunidad: los mismos países vuelven a aparecer en el índice año tras año, y ocho de los 23 países han sido incluidos en el índice todos los años desde sus inicios en 2008.

LA IMPUNIDAD
DE LOS ATAQUES
PRESENTA UN
PROFUNDO
DESAFÍO EN
MUCHOS
CONTEXTOS

A continuación se examinan, en tres países, tres tendencias actuales preocupantes en materia de libertad de expresión: el aumento de las restricciones en torno de las elecciones, el uso de leyes penales de difamación y la impugnación del espacio *online*. El hecho de que estas tres tendencias estén presentes en países tan distintos en función de sus niveles de desarrollo y de democracia indica cuán generalizado es el desafío que enfrenta la libertad de expresión.

D. ESTUDIO DE CASO SOBRE RESTRICCIONES EN TORNO A LAS ELECCIONES: GAMBIA

Al igual que en otras regiones, en África la sociedad civil contuvo el aliento con el paso de 2016 a 2017. El largamente instalado presidente autócrata de Gambia, Yahya Jammeh, amenazó con no respetar los resultados de las elecciones de diciembre de 2016, en las cuales triunfó el candidato contrario, Adama Barrow. Las elecciones supusieron un avance para el país, ya que los ciudadanos resistieron la campaña de [intimidación preelectoral](#) e hicieron un corte decisivo con el pasado. Sin embargo, aunque el presidente Jammeh inicialmente dijo que aceptaba los resultados, rápidamente revirtió su posición, declaró que las elecciones habían contenido graves anomalías y dejó en claro que no abandonaría el cargo hasta que la Corte Suprema considerara su impugnación de los resultados.

Finalmente, en enero de 2017 el presidente Jammeh cedió ante la presión, dejó el cargo y se exilió, marcando el fin de sus 22 años de gobierno. Pero en el interregno de siete semanas entre el anuncio de los resultados de la elección y la aceptación final del presidente Jammeh de dar un paso al costado, el Estado operó del modo característico de los países gobernados por líderes que intentan negar la realidad electoral: restringiendo la libertad de expresión.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Durante mucho tiempo el Estado en Gambia ha trabajado para suprimir el disenso. [Sonha Salla](#), vicepresidente de la Unión Democrática de Activistas de Gambia, describe la historia reciente de represión en el país⁷:

⁷ Extracto editado de una entrevista realizada en febrero 2017. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2l75aNN>.

Las violaciones más generalizadas de los derechos humanos bajo el régimen del ex presidente Jammeh fueron, en primer lugar, la carencia de una prensa independiente y la victimización e incluso el asesinato de periodistas. Al mismo tiempo, la dirección del Sindicato de Prensa de Gambia estaba basada fuera del país, por temor a represalias. Este entorno generó una población desinformada que desconocía muchas de las atrocidades y violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en el país. En segundo lugar, los arrestos arbitrarios y el uso de la cláusula de detención por 72 horas de la Constitución de Gambia, fueron los abusos de derechos humanos más frecuentes en el país. Muchas personas pasaron meses o años en cárceles de todo el país, algunos incomunicados sin acceso a abogados; de muchos todavía se desconoce el paradero. Finalmente, la impunidad fue el mecanismo que perpetuó la falta de imperio de la ley y la represión en el país. El régimen de Jammeh presidió una de las sociedades más cerradas del mundo. La rendición de cuentas y las solicitudes de información eran simplemente desestimadas por el régimen.

[Antes de las elecciones](#) se interrumpió la conexión a Internet y se bloquearon las llamadas telefónicas internacionales. Después de las elecciones, el Estado utilizó para su ventaja su propiedad de los medios de comunicación clave, en un país con una penetración de Internet limitada y pocas fuentes de noticias alternativas. El ganador de las elecciones, Adama Barrow, vio frustrados sus esfuerzos por hablar a la nación: la única estación de televisión del país, de propiedad estatal, [se negó a emitir](#) un discurso que él dio en la semana posterior a las elecciones.

Los medios privados de Gambia también enfrentaron restricciones cada vez mayores. A principios de enero de 2017, la Agencia Nacional de Inteligencia ordenó a [tres estaciones de radio](#) que suspendieran sus emisiones, y la semana siguiente agentes de seguridad irrumpieron en una estación de radio, *Paradise FM*, que había emitido una entrevista con un líder de oposición. [A las cuatro](#) emisoras se les informó posteriormente que sus licencias de radiodifusión habían sido revocadas, sin que se les ofreciera ninguna justificación. Tales eran los niveles de sensibilidad estatal ante la expresión de disenso que se detuvo a ciudadanos que usaban [camisetas](#) con el lema “Gambia ha decidido”.

Ante la presión internacional ejercida sobre el presidente Jammeh para que aceptara los resultados de la elección, los medios internacionales también fueron atacados. Dos [periodistas de Al Jazeera](#) fueron detenidos y deportados en enero de 2017; la cadena se había ganado la desaprobación del régimen al emitir imágenes de las protestas callejeras. Más periodistas



extranjeros fueron [deportados](#) durante ese mes, al tiempo que el presidente Jammeh se apoyaba en la Asamblea Nacional para declarar un estado de emergencia y Adama Barrow se preparaba para jurar como nuevo presidente, algo que finalmente ocurrió en la embajada de Gambia en el vecino Senegal. A siete periodistas internacionales también se les [negó el ingreso](#) a Gambia para informar sobre la prevista asunción. La intención era evidente: hacer más difícil que el público internacional obtuviera información precisa y objetiva sobre la situación.

Afortunadamente, estas tácticas resultaron inútiles. La presión internacional organizada y sostenida, combinada con una [valiente muestra de resistencia](#) de parte de un amplio espectro de la sociedad civil de Gambia, forzaron a Jammeh a dar un paso al costado. Fundamentalmente, los líderes de los estados vecinos fueron parte de la presión y ayudaron a preparar el camino para que Jammeh se exiliara, mientras la institución regional fundamental, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ([ECOWAS](#)), tomó una línea firme al comprometer tropas que estaban listas para movilizarse desde Senegal para hacer cumplir el veredicto electoral si fuera necesario.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Esta presión fragmentó el apoyo a Jammeh. Como resultado de ello, Gambia experimentó por primera vez desde su independencia un traspaso pacífico de poder, aunque aún entonces la historia no dejó de tener un giro desagradable: pronto se difundieron informes acerca de la [enorme riqueza](#) que Jammeh había transferido hacia su nuevo hogar en la [autocrática Guinea Ecuatorial](#), dejando al país [sumido en deuda](#). También aumentó la preocupación sobre el tipo de acuerdo que se le había ofrecido a Jammeh para que diera un paso al costado. No obstante, la presión internacional fue decisiva y permitió sortear el intento del Estado de ignorar a sus ciudadanos y suprimir el disenso. Debe considerarse que estableció un precedente a seguir en la próxima oportunidad en que un líder autocrático de África Occidental se niegue a aceptar la voluntad del pueblo. Asimismo, dejó en claro que los organismos regionales deben ser un objetivo clave para la incidencia de la sociedad civil en dichos contextos.

Mientras el presidente Barrow se instala en el cargo, la sociedad civil dentro y fuera de Gambia lo observará de cerca en busca de signos decisivos de ruptura con el pasado e intentará trabajar con él. El presidente Barrow ha prometido que el país pondrá fin a su aislamiento internacional, e incluso se reincorporará al *Commonwealth* y permanecerá en el Tribunal Penal Internacional, que su predecesor se había comprometido a abandonar. También ha dicho que se establecerá una [comisión de la verdad y reconciliación](#) para investigar los abusos del pasado.

Sohna Sallah destaca el potencial que se podría hacer realidad en una Gambia libre:

La apertura del espacio democrático en Gambia creará oportunidades para que los ciudadanos se informen mejor y se involucren en una verdadera democracia participativa. Los periodistas podrán operar libremente y sin trabas y los ciudadanos tendrán acceso a la información sin restricciones. La sociedad civil dejará una huella más fuerte y permanente en el país y funcionará como compañera y guardiana de la nueva administración. Aumentarán las oportunidades de negocios para miles de gambianos ya que el ex presidente Jammeh había monopolizado gran parte de los negocios en Gambia, incluso hundiendo a pequeños comerciantes. Finalmente, Gambia será acogida de nuevo en la familia de las naciones en todas las partes del mundo donde se respetan las normas y procedimientos democráticos.

Junto a activistas y periodistas, la sociedad civil de Gambia puede continuar haciendo notar los problemas que afectan al país. Debemos ser realistas: aunque a la pequeña nación le espere un futuro brillante, la remoción del ex presidente Jammeh no es una solución mágica que hará desaparecer todos los problemas del país. Va a ser un largo camino y se necesita que todos pongan manos a la obra para garantizar que el país continúe en la trayectoria de una democracia sostenible y próspera.

El progreso en estos frentes solo puede lograrse abriendo al país a la libre cobertura de los medios independientes, tanto nacionales como internacionales, y permitiendo que las personas expresen sus opiniones y formulen sus demandas. El presidente Barrow ha reconocido el papel de las redes sociales en su victoria electoral y prometió respetar la libertad de expresión. En el momento de escribir este informe, los medios estatales están siendo [reestructurados](#), los periodistas

exiliados están regresando, nuevas estaciones de radio y televisión han solicitado licencias y *Taranga FM*, una de las estaciones cerradas en enero de 2017, ha reabierto y se está expandiendo. Todos estos son nuevos comienzos prometedores, pero en abril de 2017 también se presentaron nuevos desafíos, cuando un periodista fue [atacado](#) por partidarios del presidente Barrow por hacer preguntas durante una conferencia de prensa. Los compromisos con la libertad de expresión necesitan ahora ser respaldados por acciones que cuestionen la impunidad y protejan a la gente que ejerce sus derechos, y por [cambios legislativos](#) para derogar leyes restrictivas. El respeto por la libertad de expresión será un indicador clave del progreso democrático de Gambia.

E. ESTUDIO DE CASO DE USO DE LA DIFAMACIÓN PENAL PARA DISUADIR A LOS CRÍTICOS: MALDIVAS

Un documental de Al Jazeera, "[Stealing Paradise](#)" (*Robo al Paraíso*), arrojó luz sobre las intrincadas redes de corrupción que enriquecen a la élite gobernante de [Maldivas](#). La investigación alegó que el presidente Abdulla Yameen y su círculo habían recibido enormes sobornos por lavar dinero a través del banco central del país y que también se habían beneficiado con la venta de activos estatales para su ganancia personal. Un [poder judicial corrupto](#) estrechamente vinculado a la élite gobernante, según se informó, ha sido un elemento clave para permitir la corrupción. En un intento por acallar el disenso, críticos prominentes del presidente Yameen, entre ellos el ex presidente depuesto [Mohamed Nasheed](#), han recibido largas sentencias de prisión bajo acusaciones de [delitos de terrorismo](#). También se alegó que el Estado había llevado a cabo [ataques incendiarios](#) contra una estación de TV y contra la Oficina del Auditor General para obstaculizar la investigación de denuncias de corrupción.

Además de negar las conclusiones de la investigación, el Estado intentó impedir que los ciudadanos de Maldivas tuvieran la oportunidad de juzgar por sí mismos. En agosto de 2016 se confirió nuevas prerrogativas para penalizar el disenso mediante la aprobación de una [ley de difamación penal](#). En muchos países, el desafío es que hay leyes de difamación penal desactualizadas e inadecuadas que siguen sin ser derogadas; en el caso de Maldivas, puesto que la difamación había sido despenalizada en 2009, la introducción de una nueva ley de difamación penal fue una enorme regresión. La ley, que fue rápidamente aprobada al propagarse las acusaciones de corrupción, contiene un lenguaje vago y amplio, y penaliza la expresión que se considera que contradice las normas sociales, amenaza la seguridad nacional o comenta sobre los principios del Islam. Esta ley contradice directamente la Constitución de Maldivas, además del derecho internacional. La ley se aplica a las críticas formuladas en redes sociales y medios tradicionales. Los castigos pueden incluir la retirada de licencias de sitios web y publicaciones, y la imposición de [fuertes multas y penas de prisión](#).

La nueva ley fue denunciada por la sociedad civil, que [realizó protestas](#), entre ellas la de abril de 2016 en la cual [18 periodistas](#) fueron

EN MUCHOS PAÍSES,
EL DESAFÍO ES
QUE HAY LEYES DE
DIFAMACIÓN PENAL
DESACTUALIZADAS
E INADECUADAS
QUE SIGUEN SIN
SER DEROGADAS

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

detenidos. También fue condenada por el [Relator Especial de la ONU](#) David Kaye. En un acto inusual, los gobiernos de Alemania, los Países Bajos, Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos y la Unión Europea (UE) también emitieron una [declaración conjunta](#) donde criticaron esta acción.

Una vez que la ley fue aprobada, la estación de radio y TV independiente *Dhi TV* anunció que [cerraba sus puertas](#), afirmando que no creía que pudiese funcionar de manera sustentable en las condiciones actuales. No fue la primera voz independiente silenciada en Maldivas en 2016: en abril de ese año, un polémico fallo judicial provocó el cierre del [periódico Haveeru](#) y [bloqueó](#) el acceso al sitio web regional de noticias *AdduLive*. En junio de 2016 [Channel News Maldives](#), un popular sitio web, cerró por presión del gobierno después de exponer un caso de mal uso de los recursos estatales por parte de la esposa del presidente, y en julio de 2016 un [activista de la oposición](#) fue arrestado por publicar en Twitter sobre la fuerte vigilancia de las reuniones de opositores. Fue [liberado](#) en septiembre de 2016, bajo una serie de condiciones. [Raajje TV](#), el único canal que emitía voces opositoras, recibió dos multas, en marzo y abril de 2017, en virtud de la nueva ley de difamación, en el segundo caso por transmitir un discurso de la oposición. La estación también ha sido sometida a [hostigamiento judicial](#). La libertad de expresión en Maldivas recibió un nuevo golpe en abril de 2017, cuando el prominente bloguero [Yameen Rashad](#) fue asesinado después de recibir numerosas [amenazas de muerte](#).

La ley de difamación es una de las muchas medidas introducidas recientemente para restringir derechos. [Thilmeeza Hussain](#), ex representante adjunto permanente de Maldivas ante la ONU y activista del cambio climático y los derechos humanos, expone algunos de los demás cambios regresivos recientes⁸:

Las nuevas enmiendas de la Ley de Libertad de Reunión establecen que las protestas, marchas, desfiles y otras reuniones de ese tipo solo pueden realizarse con autorización previa de la policía, y solo en áreas designadas. El desafío es que todos sabemos que los permisos no serán otorgados para las manifestaciones pacíficas que se centren en temas considerados sensibles por el gobierno. La ley será utilizada para adelantarse a las asambleas públicas y evitar que se lleven a cabo. La ley está en contradicción con el artículo 32 de la Constitución, que garantiza el derecho a reunirse sin previa notificación.

Otras restricciones a los derechos humanos son impuestas por la policía, que se vale de decisiones administrativas para restringir e impedir concentraciones por parte de la oposición política. El poder judicial está afectado y el derecho a juicio justo no es respetado. Las instituciones independientes están extintas. En general, el gobierno ha restringido sistemáticamente los derechos civiles y políticos mediante decisiones administrativas y por medio de la aprobación de legislación antidemocrática e inconstitucional.

⁸ Extracto editado de una entrevista realizada septiembre de 2016. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2lk61YF>.

El Estado se apresuró a demostrar su poder en respuesta al documental de Al Jazeera. [Amenazó](#) con usar la ley en contra de toda persona involucrada con “Stealing Paradise” y atacó verbalmente a los realizadores del documental en los medios estatales. El productor recibió amenazas de muerte y Al Jazeera retiró del país a varios de sus periodistas. Si bien el Estado no pudo impedir la emisión de “Stealing Paradise” en septiembre de 2016, su reacción fue instantánea. [Canceló el pasaporte](#) del ex presidente Nasheed, ahora exiliado en el Reino Unido, y de otros líderes de la oposición, [detuvo e interrogó](#) a dos personas acusadas de pasar información a los medios e [hizo redadas en](#) las oficinas de OSC y periódicos. Thilmeeza Hussain relata esta reacción y las razones que la fundamentaron:

Tras la emisión de “Stealing Paradise” el 7 de septiembre de 2016, las autoridades de Maldivas se embarcaron en una nueva ola de intimidación y hostigamiento de la sociedad civil. Poco después de la transmisión del documental la policía hizo una redada en un edificio de la capital, Malé, que alberga a la Red Democrática de Maldivas (MDN, por sus siglas en inglés), una organización de derechos humanos, así como al Maldives Independent, un medio de comunicación en idioma inglés. La orden de allanamiento de la policía decía que estas instituciones intentaban crear discordia y malestar en Malé e instigaban el odio entre el público y las instituciones estatales.

Yo diría que la intención del gobierno y la razón subyacente a las redadas fue intimidar a los ciudadanos y forzarles a desistir de expresarse en contra de las prácticas corruptas vigentes. Particularmente ahora que “Stealing Paradise” ha expuesto internacionalmente altos niveles de corrupción, es probable que veamos más restricciones sobre la libertad de expresión y de reunión y sobre los derechos fundamentales en general. Los agentes del Estado también continuarán atacando a la sociedad civil y a los ciudadanos que se expresen, impulsados por altos niveles de impunidad que los eximen de rendir cuentas de sus acciones.

La reciente promulgación de la ley de difamación y las redadas a MDN y el Maldives Independent tendrán un efecto de enfriamiento sobre aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Algunos periodistas que fueron entrevistados en el documental han huido del país para evitar represalias del gobierno. Los canales de televisión privados y los medios de comunicación han recurrido a la autocensura y todos los programas en vivo ven retrasada su emisión para que los medios de comunicación públicos los editen primero. Hemos visto casos de personas detenidas y puestas bajo prisión preventiva simplemente por tuitear. En general, el personal de los medios de comunicación trabaja en un ambiente de temor e intimidación.

El Estado ha seguido demostrando que teme a la exposición internacional de su falta de rendición de cuentas y mala gestión de gobierno: su respuesta al escrutinio de su gobernanza y su historial de derechos humanos por parte del *Commonwealth* ha sido [abandonar la institución internacional](#) en octubre de 2016. El Estado debe seguir siendo expuesto internacionalmente, tanto por su mala gestión de gobierno, que incluye las acusaciones de corrupción, como por sus acciones regresivas contra los derechos de la sociedad civil, por ejemplo la reintroducción de la penalización de la difamación. Thilmeeza Hussain subraya las áreas clave donde se requieren avances:

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Para que la democracia funcione de manera eficaz, tiene que haber separación de poderes. El poder judicial debe ser capaz de funcionar independientemente, sin ninguna influencia de altos funcionarios gubernamentales. Además, tanto el poder judicial como las instituciones estatales independientes deben ser reformados. Lo que es más importante, el imperio de la ley debe ser respetado.

⁹ Extracto editado de una entrevista realizada en abril de 2016. La entrevista completa está disponible en <http://bit.ly/2ljyLRa>.

F. ESTUDIO DE CASO SOBRE LA REPRESIÓN DEL ESPACIO CÍVICO EN INTERNET: VIETNAM

Con una penetración de Internet del 52% - aproximadamente el mismo nivel que China - Vietnam tiene la 13ª mayor población de usuarios de Internet en el mundo. [Más de 49 millones](#) de ciudadanos vietnamitas están en línea. [Otro estudio](#) sugiere que el 75% de los ciudadanos vietnamitas tiene acceso a Internet o a un teléfono inteligente, y el 86% de la población de entre 18 y 34 años de edad utiliza las redes sociales. La difusión de las nuevas tecnologías debería abrir un nuevo espacio de expresión del disenso y crear nuevas oportunidades para la sociedad civil, los activistas y los periodistas ciudadanos. Sin embargo, al igual que en China, el gobierno de partido único de Vietnam ha actuado enérgicamente para suprimir el espacio cívico *online*.

[Penelope Faulkner](#), vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de Vietnam (VCHR, por sus siglas en inglés), una red internacional con base en Francia, describe cómo la difusión de Internet y las redes sociales pareció en un momento prometer nuevas posibilidades en Vietnam⁹:

Lo que denominamos “sociedad civil independiente” es un fenómeno muy reciente en Vietnam, y todavía se encuentra en una fase embrionaria. La rápida penetración de Internet en el país, y en especial el desarrollo de los blogs, aumentaron su visibilidad. La experiencia de bloquear proporcionó a la gente joven los medios para participar en debates y discusiones que eran imposibles en los medios oficiales, y los blogs dispararon la aparición de redes y grupos solidarios sobre temas tales como la libertad de prensa, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, temas ambientales, igualdad sexual y la propiedad de la tierra.

Sin embargo, esa libertad relativa rápidamente generó una reacción. El CIVICUS Monitor clasifica al espacio cívico de Vietnam como [completamente cerrado](#), ya que el Partido Comunista juega un papel dominante en la vida económica, social y política. El Estado crea barreras formidables contra la información y el funcionamiento de las OSC, y ataca a quienes intentan organizar reuniones, asistir a ellas o hablar sobre cuestiones críticas.

El Estado también restringe ferozmente la libertad de expresión; los medios privados están prohibidos, la ley obliga a todos los medios a funcionar como portavoces del partido gobernante, y los temas relacionados con los derechos humanos y el activismo están prohibidos. La encuesta anual de CPJ sobre [periodistas detenidos](#) informó que hacia diciembre de 2016 ocho periodistas estaban en prisión en Vietnam, que de ese modo quedó en el sexto lugar a nivel mundial en términos de cantidad de periodistas encarcelados. Todos ellos eran blogueros y habían sido encarcelados por delitos tales como reducir la confianza del pueblo en el Partido Comunista, ir en contra de los intereses nacionales y difundir propaganda contra el Estado. El Estado ha extendido su firme control hacia la esfera digital.

En 2016 y 2017 se observaron numerosas acciones contra [blogueros](#). [Nguyen Ngoc Nhu Quynh](#) fue arrestada en octubre de 2016, [Ho Van Hai](#) en noviembre de 2016, y [Nguyen Danh Dun](#) en diciembre de 2016. La Srta. Quyn había publicado un informe donde describía 31 casos de muerte bajo custodia policial y había bloqueado sobre la [contaminación ambiental](#); fue arrestada cuando intentaba visitar a otro activista encarcelado. Mientras tanto, en enero de 2017, el periodista y activista religioso [Dang Xuan Dieu](#) fue forzado al exilio como precio por su liberación anticipada de prisión, después de cumplir cinco años de una condena de 13 años, durante la cual sufrió frecuentes malos tratos. Se denunció que el camarógrafo Nguyen Van Hoa y un bloguero, Tran Thi Nga, [fueron detenidos](#) en enero de 2017, y [dos blogueros más](#), Phan Kim Khanh y Bui Hieu Vo, fueron detenidos acusados por “hacer propaganda contra el Estado” en marzo de 2017.

El Estado también hizo gala de paranoia frente a toda crítica de los medios al [remover de su cargo al editor](#) del sitio web de noticias estatal *Petro Times* en octubre de 2016 y ordenar la suspensión del sitio durante tres meses después de que éste cubriera denuncias de corrupción en una compañía de petróleo y gas estatal. Anteriormente, en mayo de 2016, las autoridades estatales habían ordenado a un equipo de la BBC que [dejara de informar](#) sobre una visita a Vietnam del entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y había acusado al equipo de reunirse con un destacado disidente. El Estado también ha [pedido](#) a las empresas que hacen negocios en Vietnam que no hagan publicidad en canales de redes sociales clave, con la justificación de que éstas no responden suficientemente a sus solicitudes de impedir que se compartan contenidos disidentes. Cabe destacar asimismo que cuando las fuerzas de seguridad detuvieron y golpearon a un grupo de 30 activistas que intentaban asistir a un taller de la sociedad civil en octubre de 2016, lo hicieron con el objetivo de destruir los [teléfonos de los activistas](#). De manera similar, cuando fueron detenidos tras reunirse para conmemorar a los asesinados durante la invasión china de Vietnam en 1979, un tema sensible para el régimen dada su estrecha relación con China, muchos activistas se quejaron de que sus [teléfonos fueron confiscados](#) y todos los datos borrados.

El resultado es que Vietnam es ahora un lugar peligroso para ser bloguero, según relata Penelope Faulkner:

Los activistas de la sociedad civil en Vietnam son extremadamente valientes y decididos. No solo se arriesgan al arresto y la prisión, sino que son frecuentemente amenazados, acosados, golpeados y agredidos por agentes de seguridad vestidos de civil. De hecho, los activistas saben que al expresarse a favor de los derechos humanos no solo están sacrificando su propia seguridad, sino también la de sus familiares y amigos.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Además, en 2016, toda esperanza de reforma de las leyes en materia de libertad de expresión fue defraudada:

La Asamblea Nacional aprobó dos leyes relativas a la libertad de expresión en marzo de 2016, entre ellas una enmienda de la Ley de Prensa. Dado que en la actualidad no hay una prensa libre en Vietnam, se esperaba que las enmiendas abrieran el camino para los medios privados. Sin embargo, se trató evidentemente de un espejismo. No solamente todos los medios están bajo el control del Partido Comunista, sino que las restricciones han aumentado, dado que en virtud de las enmiendas la cantidad de temas prohibidos para los periodistas se incrementó de cuatro a trece. La nueva Ley sobre el Acceso a los Medios de Comunicación, también aprobada en marzo, dice más acerca de la información a la cual el público no puede tener acceso que sobre aquello a lo que sí puede acceder. El gobierno puede bloquear el acceso a cualquier información que considere que infringe las disposiciones, sobre la base de nociones vagas de los “intereses del Estado” y el “orden social y la ética”. El “derecho a saber” en Vietnam es simplemente el derecho a saber lo que el gobierno quiere contar; no es un avance hacia la transparencia.

Las restricciones sobre la libertad de expresión han sido acompañadas de otras medidas de represión de la sociedad civil. Una [nueva propuesta de ley de asociaciones](#) que está siendo discutida en el momento de escribir este informe podría empeorar considerablemente las condiciones ya difíciles para las OSC. La [ley propuesta](#) requeriría que las OSC obtengan autorización del Estado para formarse, operar y recibir financiamiento internacional, dando efectivamente al Estado un poder de veto sobre las OSC. Las OSC se han [movilizado](#) lo mejor que han podido para [oponerse](#) al proyecto de ley, pero el Estado tiene un magro historial en materia de atención a los reclamos de la sociedad civil.

Penelope Faulkner ubica la ofensiva actual contra la libertad de expresión en el marco de una tendencia en la cual el Estado – que, tal como lo refleja el acuerdo de libre comercio firmado con la UE en 2015, goza de una mayor prominencia internacional - está aprobando nuevas leyes con el pretexto de la reforma de la gestión pública. Estas fortalecen su apariencia externa de respetabilidad a la vez que consolidan el poder de las élites:

El nuevo frenesí legislativo es indicativo de una tendencia preocupante. Vietnam ha mantenido su sistema político cerrado porque ve al pluralismo como una amenaza para la supervivencia del régimen. En particular, la élite gobernante, a quien el pueblo llama “capitalistas rojos”, teme perder los enormes privilegios de que disfruta en la actualidad.

Dado que Vietnam busca desempeñar un rol más importante en la escena mundial, está bajo creciente presión de la comunidad internacional para mejorar su historial en derechos humanos. En el pasado, las autoridades mantenían el orden por medio de la represión policial generalizada y los juicios políticos de alto perfil. Pero Vietnam sabe que esto le da mala prensa, así que ha optado por una estrategia más sutil, la de utilizar la ley para sofocar el disenso. Los disidentes chinos llaman a esto “gobierno por la ley” en lugar de gobierno de la ley. Con generoso financiamiento de la comunidad internacional, Vietnam se ha embarcado en programas de “reforma del sistema legal y judicial” y ha aprobado más leyes y reglamentaciones que nunca

antes. Sin embargo, casi todas estas nuevas leyes contienen disposiciones restrictivas en un lenguaje impreciso que virtualmente otorga al Estado carta blanca para arrestar y encarcelar a los activistas.

El XXII Congreso del Partido Comunista en enero de 2016 llevó al poder a un nuevo liderazgo de línea dura. En marzo de 2016, en el espacio de solo dos semanas, siete activistas de derechos humanos fueron condenados a un total de 22 años de prisión simplemente por ejercer sus derechos legítimos a las libertades de expresión y de reunión. Tememos que esta ofensiva continuará y que defensores de derechos humanos, periodistas y críticos estarán expuestos a crecientes dificultades para ejercer sus derechos.

En el plano internacional hay muchos desafíos. En primer lugar, años después de la guerra de Vietnam, el país sigue disfrutando de un lugar privilegiado en la opinión pública. Las mismas cosas que son condenadas en China o en Cuba suelen ser perdonadas en Vietnam. En segundo lugar, porque Vietnam es una economía en crecimiento, los intereses de las empresas suelen prevalecer por sobre los derechos humanos. La Comisión Europea, por ejemplo, tramitó por vía rápida el Acuerdo de libre Comercio (ALC) entre la UE y Vietnam, renunciando a realizar la Evaluación de Impacto sobre los Derechos Humanos, que es obligatoria para finalizar las negociaciones. Nuestro Comité y la Federación Internacional por los Derechos Humanos presentaron una protesta conjunta ante el Defensor del Pueblo de la UE, que encontró a la Comisión culpable de “mala administración”. A pesar de esto, el ALC sigue adelante, con poco más que unos gestos vacíos hacia las graves preocupaciones por los derechos humanos en Vietnam. Estamos de acuerdo en que las relaciones comerciales pueden mejorar la vida de las personas, pero las políticas de muchos países democráticos son inconsistentes en materia de derechos humanos.

En otras palabras, el Estado vietnamita acepta con agradecimiento la libertad de movimientos para el dinero y los bienes, pero rechaza el libre flujo internacional de ideas sobre gobernanza, rendición de cuentas y participación, así como de apoyos para la sociedad civil. Pero, en definitiva, parte de la respuesta requerida radica en la esfera internacional: si el Estado reprime el disenso para desarrollar respetabilidad internacional, la arena internacional se vuelve un foro legítimo para forzar al gobierno a rendir cuentas. En ese sentido, en diciembre de 2016 una coalición de [21 grupos de la sociedad civil](#) instó a Vietnam, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a respetar los derechos humanos. También es importante encontrar canales para que el discurso de la sociedad civil continúe difundiéndose, incluso a través de las fronteras. Como concluye Penny Faulkner:

Nosotros podemos decir y hacer cosas que los activistas que están en Vietnam no pueden decir ni hacer sin terminar en prisión. Pero también, en nuestros artículos y emisiones de radio en idioma vietnamita, perseguimos el objetivo a más largo plazo de estimular la cultura de los derechos humanos y la democracia en Vietnam. Los jóvenes en Vietnam nunca han tenido la oportunidad de intercambiar y debatir nuevas ideas, y la diáspora tiende a igualar democracia con anticomunismo. Si la gente no aprende a respetarse mutuamente y a valorar su diversidad de opiniones, es posible que la era poscomunista sea tan represiva como la actual.

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

G. DE CARA AL FUTURO: DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La libertad de prensa y la libertad de la sociedad civil están vinculadas indisolublemente; cuando una se debilita, también lo hace la otra. Para que el disenso sea aceptado como parte esencial de la democracia participativa, es fundamental que las libertades de la sociedad civil – las de asociación, reunión pacífica y expresión – sean respetadas. El mundo actual está lejos de este ideal. Queda claro que la libertad de expresión es muy cuestionada en diversos contextos, incluso como parte de un ataque renovado sobre el disenso impulsado por la determinación de los líderes populistas de dar forma y controlar las narrativas dominantes. El éxito de la propagación de narrativas reaccionarias por medio de la diseminación de noticias falsas y la propagación del odio en las redes sociales requiere de la supresión del escrutinio independiente y la diversidad de voces.

Los efectos visibles arriba descritos son tan solo la punta del iceberg; es imposible cuantificar el efecto de enfriamiento que se genera cuando las restricciones de la libertad de expresión disuaden del disenso y alientan la autocensura. Este es, según un reciente [informe del Consejo Europeo](#), un fenómeno generalizado. Si bien los ejemplos ofrecidos pueden dar lugar al pesimismo, es importante subrayar que también hay ejemplos de respuestas de la sociedad civil en defensa de la libertad de expresión que han tenido éxito.

En mayo de 2016, después de una amplia campaña de la sociedad civil, fue retirado el proyecto de [ley sobre los Medios de Comunicación Social de Nigeria](#), que habría impuesto sanciones severas para las publicaciones en redes sociales que fueran consideradas ofensivas. También en mayo de 2016 fue lanzado en [Hong Kong](#) un nuevo servicio de noticias independiente, constituido mediante financiamiento colectivo (*crowdfunding*) en respuesta a la falta de un periodismo independiente y confiable. El mes siguiente, un periodista de Burkina Faso, [Lohé Issa Konaté](#), ganó un caso ante la Corte Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos. La sentencia incluyó una instrucción para que el Estado le pagara una indemnización por haberlo detenido y condenado por difamación penal a causa de la publicación de un artículo en el cual exponía la corrupción judicial. En agosto de 2016, [Túnez](#) se convirtió en el segundo país, después de Palestina, en firmar la Declaración sobre la Libertad de Prensa en el Mundo Árabe, que confiere a la sociedad civil una nueva oportunidad para hacer que el Estado rinda cuentas en materia de libertad de expresión. Entretanto, en octubre de 2016 se dio en El Salvador un paso hacia el cuestionamiento de la impunidad cuando cuatro miembros de una pandilla criminal fueron sentenciados a 20 años de prisión por el asesinato de [Nicolás Humberto García](#), periodista de una radio comunitaria indígena. Finalmente, en noviembre de 2016 el [gobierno de Paraguay](#) y la UNESCO firmaron un acuerdo para establecer un mecanismo de seguridad permanente para proteger a los periodistas. Estos son todos ejemplos de situaciones en las cuales la sociedad civil jugó un papel importante, o que abren nuevas oportunidades para la sociedad civil.

Como lo sugiere la discusión anterior, mientras la arena *online* ofrece a la sociedad civil oportunidades que no están disponibles en los medios de comunicación tradicionales, la fe de la sociedad civil en el espacio *online* es puesta a prueba por el aumento de la controversia y las restricciones. En respuesta, la sociedad civil tiene que trabajar para hacer que la protección de la libertad en Internet sea un tema central para el espacio cívico como un todo, independientemente del foco temático de las distintas secciones de la sociedad civil. La sociedad civil y quienes la apoyan necesitan incrementar su comprensión de y su inversión en [protección online](#) y



herramientas de [seguridad digital](#) para activistas de la sociedad civil y periodistas, de manera que los nuevos medios puedan ser utilizados de manera segura y anónima y su uso no exponga a los usuarios a amenazas. Existen muchos esquemas que podrían ser apoyados con más intensidad y a los que se podría dar mayor alcance. Además, es necesario reforzar las normas de libertad de expresión en la era digital, como por ejemplo los [Principios Globales](#) sobre la protección de la libertad de expresión y la privacidad publicados por Artículo 19 en marzo de 2017. La aprobación, en marzo de 2017, de una [resolución](#) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que sostiene que las prácticas de vigilancia estatal que no son necesarias ni proporcionadas contravienen el derecho a la privacidad, ofrece una oportunidad adicional para hacer que los estados rindan cuentas sobre el exceso de vigilancia.

También se deben actualizar constantemente las estrategias de protección y autodefensa; en este momento, por ejemplo, puede ser necesario que la sociedad civil y los medios fortalezcan su capacidad para responder a las acusaciones de que ofrecen noticias falsas, hechas por quienes detentan el poder político, y que refuercen su capacidad para verificar y demostrar hechos y datos de modo tal que puedan refutar las acusaciones formuladas en su contra. También se necesita con urgencia un debate sobre cómo se define y utiliza el término “noticias falsas”, y sobre quién lo hace; no es posible que los estados sean los únicos árbitros en este asunto. Es necesario que la sociedad civil trabaje para exponer las noticias falsas propagadas por intereses poderosos, pero también que sea muy cuidadosa respecto de si utilizar la expresión “noticias falsas”, y de cómo hacerlo. El término raramente ayuda a promover el debate.

Otra respuesta necesaria radica en el involucramiento de la sociedad civil con los sistemas jurídicos, para sensibilizar y fomentar interpretaciones más progresistas de leyes tales como las de difamación, y trabajar con las fuerzas de seguridad para cuestionar la impunidad y mejorar los [mecanismos de protección](#). Cuando se trata

RESUMEN DEL AÑO LIBERTAD DE EXPRESIÓN

de cuestionar la impunidad, el primer paso es contar: hacer un registro y proporcionar información sobre quienes son atacados, detenidos o asesinados, y sobre las circunstancias subyacentes. Por ejemplo, en las [Filipinas](#), donde el nivel de amenazas a los periodistas es alto, el Centro para la Libertad de los Medios mantiene una [base de datos detallada](#) de los asesinatos de profesionales de los medios, y distingue entre las muertes que están relacionadas con el trabajo periodístico y las que no. Se necesitan muchas más iniciativas de este tipo.

Es necesario llevar el tema de la propiedad de los medios de comunicación a un nivel más alto de la agenda política. El desafío va más allá de que los medios de comunicación públicos estén sujetos a una excesiva interferencia estatal y que solo promuevan voces alineadas con el Estado. En varios contextos, especialmente en América Latina, la propiedad de los medios oligárquicos, concentrada en unas pocas manos de miembros de la élite bien conectados, va en contra de la diversidad de expresión y dificulta a la sociedad civil la comunicación de sus opiniones. La concentración de la propiedad se está replicando crecientemente en las plataformas *online*. Por lo tanto, el debate sobre quién es dueño de qué es cada vez más importante. La respuesta de la sociedad civil debería ser doble: por un lado, desarrollar sus propios espacios de expresión diversa y apoyar a los que ya existen; por el otro, promover entre los ciudadanos conciencia de los filtros políticos y económicos a través de los cuales pasa la información que consumen.

En muchos contextos, las conexiones entre sociedad civil y medios siguen siendo insuficientes y pueden verse obstaculizadas por malentendidos de ambas partes. Es necesario fomentar una diversa gama de conexiones entre la sociedad civil y las redes de periodistas independientes. La filtración de los [Panama Papers](#) en 2016, un compromiso demasiado grande para cualquier medio individual, demostró el poder que es posible desplegar y los valiosos resultados que es posible lograr por medio de una cooperación que deja de lado los intereses individuales. También es necesario que la sociedad civil se comprometa activamente con los medios y cree conexiones que alienten a mejorar la comprensión de los problemas del espacio cívico entre los profesionales de los medios de comunicación. El Manual para medios de comunicación, [Guía para informar sobre el espacio cívico](#), lanzado por CIVICUS en marzo de 2017, constituye una iniciativa para alentar la comprensión. Se necesitan muchas más.

En resumen, la lucha contra las actuales políticas regresivas y la defensa de los derechos humanos solo avanzarán si se establecen conexiones más fuertes entre la sociedad civil y los medios de comunicación independientes. Nos están atacando a ambos, y debemos luchar juntos.